



Vista del Congreso boliviano a través de una ventana de la Cancillería en La Paz, destrozada por una bala, símbolo de la violencia generada por las imposiciones económicas del FMI, en febrero de 2003. Foto: Kathryn Cook (2005).

CAPÍTULO 4

Lecciones de sangre y fuego: el Fondo Monetario Internacional y el Febrero Negro boliviano

Jim Shultz



La Paz, sede de gobierno de Bolivia, estalló durante dos días en febrero de 2003 en violento conflicto y protestas relacionadas a un incremento de impuestos aplicado a la clase trabajadora de bajos recursos. Fue consecuencia directa de las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) a que el gobierno tome medidas para reducir su déficit presupuestario.

Con la finalidad de comprender qué fue lo que sucedió en el trasfondo que originó un conflicto que dejó a 34 muertos y más de 100 heridos, Jim Shultz revisó los archivos de los acuerdos entre Bolivia y el FMI, con la finalidad de hacer un seguimiento de la trayectoria de las exigencias que el Fondo impuso a los líderes del país. Se entrevistó con el entonces vicepresidente de Bolivia, con asesores económicos clave del gobierno, con funcionarios del FMI y también con los líderes de las protestas callejeras y con la madre de la víctima más conocida del conflicto.

La historia del Febrero Negro boliviano ofrece un panorama completo y realista de lo que sucede realmente cuando países empobrecidos bregan para poder atender las demandas de poderosas instituciones económicas multinacionales. Ofrece lecciones que van mucho más allá de las fronteras bolivianas.

I. Introducción

Desde una ventana panorámica de las oficinas del Fondo Monetario Internacional en La Paz, uno puede ver el tejado donde Ana Colque, enfermera y madre soltera, fue alcanzada por un disparo y muerta en febrero de 2003. Francotiradores especiales del ejército dispararon la bala que atravesó su pecho cuando subió a un techo para ayudar a Ronald Callanqui, un albañil de 25 años de edad,

quien también recibió un disparo de los soldados una hora antes, en el mismo lugar. Ambos fueron asesinados durante un violento asalto militar destinado a contener las protestas populares en contra de un programa económico de ajuste impuesto en Bolivia por el FMI.

Fue un conflicto que convirtió el centro de La Paz, el día anterior, en una zona de batalla entre el ejército y la policía boliviana, frente al Congreso Nacional y al Palacio de Gobierno. Antes de que terminara, en dos días de lo que sería conocido en Bolivia como Febrero Negro, dejaría 34 personas muertas y cerca a 200 heridas.

La historia de Febrero Negro no es sólo la historia de dos trágicos días en La Paz, sino también del sistema económico global que puso en marcha esta violencia. Todos los actores de este drama estaban presentes: El FMI, el Banco Mundial y sus políticas económicas hacia los países pobres; un gobierno atrapado entre estas políticas y las demandas de la gente; las corporaciones multinacionales presionando por sus intereses; los trabajadores y los movimientos sociales tomando las calles; y las personas atrapadas mortalmente en este cruce de fuego.

II. El Fondo Monetario Internacional y las políticas económicas de ajuste

En 1944, casi al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los poderes de Europa Occidental y de Norte América crearon un grupo de instituciones globales a través de las cuales esperaban poder traer paz y prosperidad económica al conjunto de las naciones del mundo. Los triunfadores de la guerra, para proteger la paz, establecieron una nueva Organización de las Naciones Unidas (ONU). Delegados de 44 naciones se reunieron en junio de ese año, en el pequeño pueblo de Bretton Woods en Nueva Hampshire, EE.UU. para diseñar el curso hacia el bienestar de la economía global.

Durante la formación de las Naciones Unidas todavía estaba fresco en la memoria de sus fundadores el trágico legado de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. En Bretton Woods, el fantasma oculto entre las sombras era la memoria de la Gran Depresión y los delegados esperaban lograr un orden económico mundial que pudiera evitar el tipo de colapso económico sufrido en la década anterior.¹

Como resultado de estas negociaciones nacieron dos instituciones. Una fue el Banco Mundial, a la que se le dio la responsabilidad de financiar proyectos de infraestructura mayores, comenzando con la reconstrucción de la Europa de post guerra. La otra institución nacida ese verano en Nueva Hampshire fue el Fondo Monetario Internacional. El papel asignado al FMI fue promover la estabilidad de la demanda internacional de bienes y servicios. El Fondo haría esto estabilizando los intercambios internacionales de monedas, a través de préstamos de corto

plazo a los gobiernos, que de otra manera tendrían problemas para realizar pagos internacionales relacionados con el comercio o la deuda con otros países.²

Hoy en día, el FMI y el Banco Mundial reciben una serie de críticas de parte de muchos sectores sociales e intelectuales. Es importante recordar que, a los ojos de sus fundadores, la constitución del Fondo y del Banco fue tan importante como la creación de las Naciones Unidas, ese mismo año. “El FMI fue fundado con la creencia de que había una necesidad de acción colectiva a nivel global para alcanzar la estabilidad económica, así como las Naciones Unidas fue constituida bajo la idea de que había una necesidad de una acción colectiva a nivel global para alcanzar la estabilidad política,” escribe el premio Nobel en economía, Joseph Stiglitz.³

John Maynard Keynes, el economista inglés que dirigió la delegación británica en Bretton Woods y a quien se le ha dado el crédito como el arquitecto de las instituciones que nacieron allí, dijo al final de la conferencia:

Hemos demostrado que a través de la unión de 44 países en verdad se puede trabajar juntos en una tarea constructiva, en amistad y sin desacuerdo. Sólo unos pocos creen que esto es posible. Si continuamos con un desafío más grande así como hemos comenzado con esta limitada tarea, hay esperanza para el mundo. La hermandad de los hombres será mucho más que una simple frase.⁴

El FMI presume de una serie de importantes logros a lo largo de su historia, entre los más recientes: el fortalecimiento de Corea del Sur con 21 000 millones de dólares en créditos durante la crisis financiera asiática de 1997 y 1998; la ayuda a Kenia con 52 millones de dólares en créditos para combatir los efectos de la sequía de 2000; y la cooperación para la instalación de sistemas de tesorería en los países de la ex Unión Soviética, después de su colapso político en los años 90.⁵

Seis décadas después de su nacimiento, el FMI cuenta con 2 800 empleados y una misión internacional que va mas allá de la que le dieron Keynes y los otros fundadores que se reunieron en Bretton Woods. Desde sus oficinas en Washington, el FMI, describe su papel de la siguiente manera:

Sus fines son evitar las crisis en el sistema, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas; como su nombre lo indica, la institución es también un fondo al que los países miembros que necesiten financiamiento temporal pueden acudir para superar los problemas de sus balanzas de pagos.⁶

El Fondo afirma que a través de “la labor que realiza para fortalecer el sistema financiero internacional y acelerar la lucha contra la pobreza, además de promover medidas sensatas de política económica en todos los países miembros, el FMI contribuye a que la globalización funcione en beneficio de todos.”⁷

¿De qué manera el FMI ha evolucionado de una misión tan específica como es el manejo de los intercambios financieros y la balanza de pagos, a convertirse en un agente clave de las políticas económicas mundiales?

Primero, el trabajo inicial del Fondo se volvió obsoleto. Cuando el FMI nació, el intercambio financiero mundial estaba basado en el patrón oro como estándar. Cuando éste fue abandonado en 1971, el Fondo perdió su función principal y pronto comenzó a buscar una nueva.⁸ Encontró su nuevo propósito en los años 80 durante el movimiento económico conservador dirigido por el presidente estadounidense Ronald Reagan y la primera ministra británica Margaret Thatcher.

En sus respectivos países, Reagan y Thatcher enfrentaban batallas para rediseñar las reglas económicas con el objetivo de ofrecer mayor libertad a las corporaciones y limitar mucho más el papel de los gobiernos. El FMI se convirtió en el principal vehículo para exportar estas políticas al resto del mundo, siendo sus principales instrumentos las condiciones impuestas a los préstamos. “El FMI y el Banco Mundial se convirtieron en las instituciones a través de las cuales estas políticas fueron impuestas en los reticentes países pobres que con frecuencia necesitaban desesperadamente sus créditos y ayuda,” escribe Stiglitz.⁹

El conjunto de estas reformas económicas fondomonetaristas es conocido por una serie de nombres: ajuste estructural, modelo económico neoliberal y el Consenso de Washington. Como condición para la obtención de ayuda, el FMI, el Banco Mundial y otras instituciones de cooperación internacional, se requería que los países privaticen sus recursos naturales. Fueron obligados a vender todas las empresas estatales, desde las aerolíneas hasta las compañías telefónicas. Las leyes de protección laboral debían dar marcha atrás. El gasto público tenía que ser reducido y los impuestos incrementados para disminuir los déficits públicos presupuestarios.

Hoy en día, el FMI no es más un simple asesor económico sentado en la sombra. Es un poder político que, en muchos países, ejerce más influencia sobre las políticas económicas que los propios gobernantes electos.

Una institución sin capacidad para entender la realidad de los más pobres

Para sus críticos, especialmente quienes observan al Fondo y sus actividades desde la perspectiva de los países de escasos recursos, el FMI fue diseñado desde sus inicios para proteger los intereses económicos de las naciones más ricas, a menudo a expensas de las pobres. Oficialmente, la más alta autoridad en el Fondo es la Junta de Gobernadores, compuesta por 184 países miembros. Sin embargo, en realidad, el Fondo es manejado por un reducido Comité Ejecutivo dirigido por sus miembros permanentes: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Inglaterra, China, Rusia, Arabia Saudí, más un grupo de otros países ricos que tienen una importante participación accionaria, como Canadá, Italia, Suiza, Bélgica y Holanda.¹⁰

Más aún, el sistema de distribución de poder que gobierna al FMI no se basa en “una nación, un voto”, como sucede en la Asamblea General de la Naciones

Unidas, sino en “un millón de dólares, un voto”, esquema basado en el tamaño de la economía de cada país. Por ejemplo, el poder de votación de Estados Unidos es doscientas veces mayor que el de Bolivia.¹¹ Las reglas del FMI también ofrecen a Estados Unidos un control único sobre las decisiones más importantes del Fondo. Los términos de acuerdo del FMI requieren una mayoría de 85% para tomar las decisiones más importantes. No es una coincidencia que Estados Unidos tenga un poder de votación de 17,6%, lo que da como resultado que este país tenga poder de veto sobre las decisiones del Fondo, la única nación en el mundo que detenta tal capacidad de control.¹²

Por lo tanto, no sorprende que las políticas favorables al mercado impuestas por el Fondo y el Banco también beneficien directamente los intereses económicos de los países ricos que controlan a esas instituciones. La privatización de los recursos públicos ha abierto nuevos mercados para corporaciones transnacionales como las estadounidenses Bechtel y Enron, la inglesa British Petroleum, la holandesa Shell y la francesa Suez. La presión por mantener un gasto público reducido con la finalidad de contar con fondos suficientes para el pago de los créditos, también beneficia a las naciones ricas y a la banca, que han obtenido beneficios de miles de millones de dólares por los préstamos realizados a los países pobres.

Los funcionarios del gobierno de Estados Unidos admiten abiertamente que las políticas del Fondo y del Banco benefician directamente a las corporaciones estadounidenses. El escritor William Finnegan menciona:

En su testimonio al Congreso [de Estados Unidos] en 1995, Lawrence Summers, en ese entonces Secretario del Departamento de Tesoro, reveló que las corporaciones estadounidenses recibieron 1.35 dólares en contratos por cada dólar que el gobierno estadounidense contribuye al Banco Mundial y otros bancos multilaterales de desarrollo.¹³

Para Estados Unidos y otras naciones acaudaladas, apoyar al Fondo y el Banco Mundial no es una simple obra de caridad o una extensión de la ideología económica conservadora. Es una lucrativa y calculada oportunidad para asegurar el retorno de sus inversiones. El economista boliviano, Roberto Fernández, dice: “Por su propia constitución y la distribución interna del poder, desde su nacimiento en Bretton Woods en 1944, el Fondo siempre favoreció a los intereses económicos y políticos de Estados Unidos y de los países de la actual Unión Europea.”¹⁴

Los críticos también argumentan que el Fondo es incapaz de entender el impacto que sus políticas tienen en los países pobres o deliberadamente obvia sus condiciones. Estas críticas incluyen la forma en que el personal del Fondo está compuesto. Las dos terceras partes del personal del FMI son economistas y más del 90% de sus empleados tiene como base su sede en Washington. Nor-

malmente la representación del Fondo en los otros países está limitada a una sola persona.¹⁵

En Latinoamérica, Asia y África, el Fondo y sus políticas se enfrentan a continuos ataques, tanto en círculos intelectuales como en las calles. Los modelos que prometían prosperidad económica, cuando se presentaban en *Power Point* en las oficinas de Washington, han resultado un fracaso después de su aplicación en el terreno.

Entre las políticas del FMI, una de las que más daño ha causado y levantado más protestas ha sido su insistencia de que los países pobres reduzcan el gasto público e incrementen los impuestos en nombre de la reducción del déficit fiscal.

El FMI y la exigencia por reducir el déficit fiscal

Las intervenciones del FMI relacionadas con la reducción de la deuda y del déficit, tienen sus raíces en la crisis latinoamericana de la deuda de los años 80. Como resultado del constante endeudamiento y de los pagos por intereses, que se elevaron hasta las nubes en ese entonces, muchos países se encontraron sobrecargados por la deuda e incapaces de cumplir con los bancos internacionales llegando a una situación muy cercana a la bancarrota.¹⁶

El Fondo describe así su papel en esta crisis de la deuda: “el FMI prestó ayuda a los países deudores para que elaboraran programas de estabilización a mediano plazo, facilitó un volumen considerable de financiamiento con cargo a sus propios recursos y estableció paquetes de financiamiento de gobiernos acreedores, bancos comerciales y organismos internacionales.”¹⁷ En la jerga del Fondo, esto significa que otorgó ayuda de emergencia para que los países pudieran continuar pagando a los bancos y a otras instituciones crediticias. Roberto Fernández agrega, “Igualmente importante [es que el Fondo] tomó ventaja de las circunstancias para aplicar políticas de largo alcance en países pobres, con el objeto de volverlos más dependientes de las economías centrales y de su poder político.”¹⁸

Un déficit público, en palabras simples, es el monto que gasta el gobierno en un año y que es mayor que sus ingresos por impuestos, donaciones extranjeras y otros ingresos. Para equilibrar el déficit presupuestario los países solicitan préstamos para después pagarlos con intereses. Las naciones pobres piden prestado el dinero de muchas fuentes, incluyendo las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el FMI, los bancos privados y de otros gobiernos.

Los gastos deficitarios son práctica común de muchos gobiernos y no sólo de los países pobres. En cuarenta y tres años –con excepción de cinco de ellos– Estados Unidos ha manejado déficit presupuestarios que van de los más pequeños a los más grandes.¹⁹ El 2006, el déficit presupuestario de Estados Unidos alcanzó 260 000 millones de dólares, lo que significó cerca a 10% de todos los gastos del gobierno federal.²⁰

La reducción del déficit público es la piedra angular de las políticas del FMI y una condición básica que los gobiernos deben alcanzar para obtener créditos del Fondo y otro tipo de ayuda. El Fondo arguye que la reducción del déficit es esencial para ayudar a los países pobres a alcanzar estabilidad económica. Y asegura: “Una de las aproximaciones clave de las investigaciones realizadas acerca de los países en desarrollo, es que una política fiscal prudente –bajo déficit presupuestario y bajo nivel de deuda pública– es el ingrediente central para el crecimiento económico, el cual es esencial para la reducción de la pobreza y para mejorar los resultados de los programas sociales.”²¹

Los funcionarios del Fondo aseguran que su principal preocupación no está centrada en apoyar a las instituciones crediticias, sino en ayudar a los países pobres a obtener recursos externos necesarios para su desarrollo. Arguye que los países fuertemente endeudados son como una familia que repetidamente se presta dinero del banco o de una tienda hasta que un día le dicen que su deuda es muy grande y que ya no puede recibir más crédito. La disciplina fiscal, razona el Fondo, es la capacidad de tomar duras decisiones ahora, para evitar situaciones aun más duras en el camino y, finalmente, asegurar un crecimiento económico sostenible en el largo plazo.²²

Por definición, la reducción del déficit presupuestario significa que los gobiernos deben reducir el gasto público, elevar los impuestos o ambos. Mientras el FMI enfatiza en la importancia de estas acciones para garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo, muchos investigadores y gobiernos de países pobres aseguran que la presión económica ejercida por el Fondo, pone a las ya de por sí frágiles economías al borde del abismo. Arthur MacEwan, profesor de Economía de la Universidad de Massachussets dice:

La manía del FMI por reducir el gasto público en tiempos de crisis ha sido racionalizada bajo la idea de que presupuestos equilibrados son la base para el crecimiento y la estabilidad económica a largo plazo. Públicamente el FMI lamenta el hecho de que estas políticas causan impactos negativos severos en sectores de bajos ingresos (porque ambos generan altos niveles de desempleo y destripan los programas sociales). Pese a ello, los funcionarios del Fondo todavía sostienen absurdamente que estas políticas son necesarias para asegurar una estabilidad duradera. Durante las recesiones, los déficit fiscales moderados del gobierno (como en años recientes en Argentina) son una política contra cíclica esperada; y los crecimientos equilibrados solamente ayudan a acelerar las caídas. Al mismo tiempo, sabemos que los recortes presupuestarios del gasto social (educación, salud, proyectos de infraestructura) impiden el progreso económico a largo plazo.²³

Joseph Stiglitz va mas allá diciendo que las reglas dogmáticas del FMI sobre la reducción del déficit van directamente en contra de la misión original de promover la expansión económica.

Hoy el FMI otorga fondos sólo si los países se comprometen a llevar adelante políticas de reducción del déficit fiscal, elevación de impuestos y de las tasas de interés que conducen a una contracción económica. Keynes estaría retorciéndose en su tumba si pudiera ver lo que le ha pasado a su criatura.²⁴

¿Qué significan las políticas de reducción de déficit en términos prácticos para la gente? Por ejemplo, Oxfam informa que en la república africana de Camerún, el FMI ha exigido que el gobierno alcance un superávit fiscal para el año 2005. Los recortes en el gasto público requeridos para alcanzar esta meta doblan el presupuesto en un país donde la mortalidad infantil continúa siendo un profundo problema.²⁵ Incumplir los términos de un acuerdo con el FMI puede tener un costo alto para un Estado pobre. Cuando Honduras tuvo un desacuerdo con el FMI sobre el incremento en los salarios de los maestros, le costó al gobierno 194 millones de dólares por el retraso en el alivio de la deuda y por la interrupción en los recursos obtenidos por donaciones. La asistencia que se perdió fue más de tres veces que el monto necesario para cubrir las necesidades del país en cuanto a proveer educación universal a todos los niños de la nación.²⁶

En Bolivia, en 2003, las demandas del FMI para la reducción del déficit significaron no solo impuestos más altos para la gente más pobre sino que también desencadenaron una serie de enfrentamientos que dejaron a 34 familias sepultando a sus muertos.

III. El FMI en Bolivia: la lucha de una nación por cumplir las imposiciones económicas externas

Durante dos décadas el FMI y el Banco Mundial han sido los principales arquitectos de las políticas económicas bolivianas. Muchos dirán que el Fondo ha tenido más influencia que el propio gobierno. De 1986 a 2001, Bolivia recibió 350 millones de dólares del FMI con la condición de adoptar políticas económicas específicas.²⁷

El profundo involucramiento del FMI en la política económica boliviana puede rastrearse hasta la época en que el país lidiaba con una hiperinflación a mediados de los años 80. A fines de los 70 y principios de los 80, el país experimentó un clima de inestabilidad política agudo. Entre 1978 y 1982, Bolivia tuvo nueve presidentes diferentes -algunos fueron elegidos en las urnas y otros fueron unos brutales dictadores.²⁸ Esta inestabilidad política combinada con el colapso de los precios del estaño -la base de la economía boliviana en ese tiempo- representó un severo golpe para la economía nacional.²⁹ De 1970 a 1980, la deuda externa boliviana creció más de seis veces hasta alcanzar los 3 000 millones de dólares. La economía nacional colapsaba.³⁰ En la lista negra para recibir ayuda del FMI y el Banco Mundial, el gobierno tuvo que suspender el pago de su deuda externa y

comenzó a emitir más dinero para mantener sus compromisos de gasto público.³¹ También permitió que la moneda flotara en valor contra el dólar, encendiendo la chispa de la inflación que, en 1985, alcanzó niveles anuales de 25 000 %.³²

En 1985, el nuevo gobierno electo encabezado por Víctor Paz Estensoro aplicó una serie de extremas medidas para poner la inflación bajo control. Éstas incluían la devaluación de la moneda boliviana, la eliminación de los subsidios a la producción, la desregulación de las tasas de interés, y acciones represivas contra los sindicatos de trabajadores para prevenir demandas de incrementos salariales.³³ Dos años más tarde, la inflación estaba por debajo de 20% y el crecimiento de Bolivia había subido a una tasa anual de 2,4%.

Un año después de que Bolivia se auto impusiera esa terapia de shock, el FMI ofreció una limitada ayuda al país y apoyó la creación de un fondo social de emergencia para ayudar a generar empleo para algunos quienes habían sido más afectados por la terapia.³⁴ A través de esa puerta, el FMI y el Banco Mundial entrarían a Bolivia por las próximas dos décadas, trayendo con ellos un arsenal completo de reformas de ‘ajuste estructural’ como una condición para su asistencia económica. Las políticas del FMI y el Banco se traducirían en el modelo económico de los sucesivos gobiernos bolivianos, administración tras administración.

Los pronósticos del FMI y el Banco Mundial versus la realidad boliviana

En agosto de 1998, el FMI, el Banco Mundial y el gobierno boliviano hicieron público conjuntamente el “Documento Marco de Políticas,” el cual desarrollaba un exhaustivo plan para revisar la economía nacional.³⁵ Los marcos sobre políticas y las cartas de intención como éstas son mecanismos por medio de los cuales los funcionarios del FMI aseguran compromisos de los gobiernos sobre las reformas que irán implementando a cambio de la ayuda. Son también los únicos documentos abiertos al público; el resto de las negociaciones se realizan a puerta cerrada entre el FMI, el Banco y los gobiernos.

El Marco de Políticas de 1998 presentó las especificaciones de las reformas –amplia privatización, modificaciones laborales, reducción del déficit– y pronósticos optimistas de lo que se esperaba para Bolivia:

En este contexto, un objetivo clave... es alcanzar una reducción significativa de la pobreza hasta el 2002 a través de un crecimiento económico más rápido y programas sociales más vigorosos. Específicamente, el programa busca elevar el crecimiento económico de 4,5 en 1998 a 5,5 - 6% en el 2001, reducir la inflación gradualmente a 5% en 2001, lograr un aumento moderado en las reservas y mantener en un curso controlable el déficit externo en cuenta corriente.³⁶

Bolivia llevó a la práctica virtualmente todo el programa. Pero en lugar de que la economía prosperara con dichas políticas, más bien empeoró. Cuatro años más tarde el gobierno boliviano presentó un sombrío informe al FMI:

El gobierno que asumió el mando en agosto de 2002, heredó una situación de estancamiento económico prolongado. El crecimiento económico fue de solo 1,5 por ciento como promedio anual en el periodo 1999-2002. La caída del ingreso per cápita y del empleo y la reducción de la economía informal... han contribuido a elevar las tensiones sociales que estallaron recientemente. Más aún, la débil economía ha minado los ingresos gubernamentales, aumentado el déficit fiscal y colocado una pesada carga financiera sobre el sector público. El estancamiento económico prolongado también ha debilitado los sectores financieros y empresariales.³⁷

La diferencia entre lo que el FMI y el Banco Mundial habían pronosticado y lo que realmente sucedió, no podía ser más grande.

Los resultados son lamentables dos décadas después de los experimentos económicos del FMI y del Banco. En 2005, los niveles de pobreza alcanzaron a 64% de la población y siguieron subiendo.³⁸ La tasa de desempleo abarcaba a 14% de todos los trabajadores, la más alta en 15 años y se cuadruplicaría en la última década.³⁹ Cerca de dos tercios del presupuesto nacional estaban financiados mediante deuda y donaciones.⁴⁰ El crecimiento económico, cuando lo había, benefició mayormente a industrias específicas como la exportación de petróleo y gas, mayoritariamente en posesión de compañías extranjeras.⁴¹

Lo que ha sido cierto para la economía boliviana como un todo también ha sido cierto para las reformas específicas requeridas por el FMI y el Banco Mundial, entre ellas la privatización de la industria del gas y petróleo y de los sistemas públicos de agua.

Una fracción de las reformas propiciadas por el Banco y el FMI, la privatización del agua, resultó otro fracaso. A mediados de los años 90, el Banco Mundial llevó adelante la privatización de los sistemas públicos de agua de dos de las ciudades más grandes de Bolivia, Cochabamba y El Alto-La Paz, como una de las condiciones para seguir recibiendo ayuda para el desarrollo de este sector.⁴² El Banco argumentó que la entrega del agua a las corporaciones extranjeras era esencial para abrir las puertas a la inversión necesaria y para poder contar con una administración experimentada.⁴³

En Cochabamba, dicha exigencia por la privatización condujo a la suscripción de un contrato por 40 años con un consorcio controlado por la corporación Bechtel, de California. Una vez que las corporaciones se hicieron cargo del sistema de agua, los precios se incrementaron en más de 40% para la gente de más bajos ingresos y en muchos otros casos incluso más.⁴⁴ En última instancia, las protestas callejeras en todo el país condujeron a la salida de la compañía en abril de 2000, pero solamente después del establecimiento de un estado de sitio dictado por el gobierno, dirigido a proteger el contrato, y que causó la muerte de un joven y más de cien personas heridas.⁴⁵ Un levantamiento similar en 2005 condujo a la anulación de otro acuerdo privatizador en El Alto-La Paz con la corporación francesa Suez. (Para más detalles sobre la Guerra del Agua, ver el Capítulo 1).

La privatización del sector petrolero y gasífero también era parte del plan maestro del FMI y del Banco Mundial para Bolivia, que exigía la “privatización total de las instituciones públicas remanentes.”⁴⁶ La teoría detrás de esas propuestas era de que si Bolivia reducía drásticamente la participación del Estado en los sectores del petróleo y el gas, recortando sus utilidades del 50% al 18% en los campos hidrocarburíferos –y en consecuencia elevaba la cuota de participación de las compañías petroleras extranjeras en similar cantidad– la inversión y la producción se incrementarían dramáticamente, y Bolivia ganaría en realidad mucho más dinero del que conseguiría por la retención de regalías más elevadas.⁴⁷ Desafortunadamente, esa predicción, al igual que muchas del FMI y del Banco, no dio el resultado prometido. Mientras Bolivia incrementaba su producción de hidrocarburos en 135% –generando de ese modo formidables utilidades a las compañías privadas que asumieron la industria– los ingresos gubernamentales por dicho sector económico, sólo se incrementaron en un endeble 10%.⁴⁸ (Para obtener más información sobre el tema del gas boliviano, ver el Capítulo 3).

Al cumplir las demandas de privatización del FMI, Bolivia terminó reduciendo sus ingresos y comenzó a generar un mayor déficit público. Más tarde, el FMI volvería a Bolivia y ejercería su influencia para reducir ese déficit, no a costa de las corporaciones extranjeras sino de la clase trabajadora boliviana.

El FMI exige la reducción del déficit fiscal boliviano

Bolivia, como muchos otros países pobres, e incluso varios ricos, se apoya en préstamos para financiar su presupuesto nacional anual. Sin embargo, en los años precedentes al Febrero Negro, el déficit fiscal boliviano había subido hasta el techo. En 1997, el presupuesto de préstamos equivalía a 3,3% del PIB, el 2002 había alcanzado a 8,7%.⁴⁹

Ese nivel de crédito significa que cada año la mayor parte del presupuesto debe ser empleada en el pago de la deuda en vez de proporcionar servicios como salud y educación. En 2002 Bolivia debía pagar más de 496 millones por el servicio de su deuda externa, 16% del presupuesto total de la nación.⁵⁰

Durante años el FMI ha estado presionado a Bolivia para que tome drásticas decisiones para reducir su déficit, una demanda que se refleja en los memorándums intercambiados entre Bolivia y el Fondo. En 1999, el Fondo y el gobierno acordaron un objetivo. El 2002, Bolivia reduciría su déficit a sólo 2% del PIB.⁵¹ Bolivia no pudo cumplir esta meta por una diferencia de más de 400 millones de dólares.

De muchas maneras, el abultado déficit boliviano no fue más que una resonancia andina de la explosión deficitaria que se desarrollaba justo a la vuelta de la esquina de las oficinas del FMI en Washington: en la Casa Blanca de Bush. El 2000, un año antes de la ascensión de Bush a la presidencia, Estados Unidos tenía un excedente presupuestario que equivalía al 2,4% de su PIB. Para el año

2004, este excedente había desaparecido y dado lugar a un déficit de 3,7%, un descenso fiscal más drástico que el de Bolivia.⁵²

El presidente George W. Bush justificó este aumento deficitario arguyendo:

Recuerdo que mientras hacíamos campaña en Chicago, uno de los periodistas me preguntó “¿hay alguna posibilidad de entrar en déficit?” y respondí, sólo... sólo en tiempos de guerra, en tiempos de inseguridad económica como resultado de una recesión o en tiempos de emergencia nacional.⁵³

El vicepresidente Dick Cheney fue aún más lejos, afirmando que “Reagan probó que los déficit no importan.”⁵⁴

Durante el mismo periodo, la economía boliviana estaba en problemas, en parte debido a fuerzas que provenían directamente de Estados Unidos. Una de estas fuerzas fue el programa de erradicación de la hoja de coca, un ingrediente básico para la fabricación de cocaína. La otra fue la recesión estadounidense y su impacto negativo en el comercio y las inversiones en Latinoamérica. Hacia principios de 2003, el crecimiento económico de Bolivia alcanzó solo 1,5%, y el sector informal, donde mucha de la gente pobre encuentra empleo, estaba en efecto contrayéndose.⁵⁵

En los años que corrieron hasta los acontecimientos de Febrero Negro, Bolivia estaba casi exactamente en la misma situación económica utilizada para justificar los elevados déficits en Estados Unidos; economistas expertos han aconsejado que mantener dichos déficits en lugar de cortar los gastos, era la exacta medicina necesaria para darle un empujón de arranque a la economía boliviana. Durante una visita en octubre de 2001 a Bolivia, Joseph Stiglitz les dijo lo siguiente a las autoridades gubernamentales:

Ahora que Bolivia está en una recesión... Por ello creo que hay formas de usar los recursos del futuro para resolver los problemas actuales... uno de los métodos más comunes para atacar una recesión es incrementar el gasto público.⁵⁶

Los funcionarios del FMI no tomarían el mismo generoso punto de vista sobre los problemas del déficit en Bolivia, como el que reserva Estados Unidos para sí mismo.

A principios de 2003, los funcionarios del FMI decidieron que era hora para que el gobierno de Bolivia asumiera una posición dura y enfrentara el déficit con acciones serias. El Fondo exigió que en el lapso de un año el déficit sea reducido en casi un tercio, para alcanzar una meta de 5,5% del PIB. Alcanzar ese objetivo sería una condición para recibir ayuda a largo plazo. Para cumplir, el gobierno tendría que haber realizado una combinación de recortes presupuestarios e incremento de los impuestos por más de 250 millones de dólares, equivalentes a 8% del presupuesto total del país.⁵⁷

Después del fiasco de febrero, los funcionarios del FMI insistieron en que el gobierno boliviano estaba plenamente de acuerdo con el Fondo en la reducción del déficit a la meta de 5,5%. Un portavoz del Fondo en Washington dijo: “La meta del 5,5% de déficit fiscal del PIB fue convenida mutuamente entre el gobierno y el personal del Fondo como una forma de restaurar la sostenibilidad.”⁵⁸

Sin embargo, funcionarios bolivianos de alto rango, desde el entonces vicepresidente Carlos Mesa y otros, aseguran que el Fondo fue quien insistió en lograr la meta del 5,5%, a pesar de las advertencias gubernamentales de que la medida sería tanto económica y políticamente imposible de ejecutar. Los funcionarios del poder ejecutivo también advirtieron al FMI que forzar tal recorte podría conducir exactamente al tipo de convulsión social violenta que se produjo ese mismo febrero.

El ex presidente boliviano, Carlos Mesa, quien era vice presidente a inicios de 2003, dijo que el gobierno fue explícito en sus conversaciones con los funcionarios del FMI: “El ministro de Finanzas, que se reunió [con funcionarios del FMI] explicó al Fondo Monetario Internacional la imposibilidad de tomar un salto tan alto.” El gobierno propuso una meta alternativa de 6,5%, un decremento sustancial del 8,7% de déficit registrado el pasado año.⁵⁹

El director de presupuesto gubernamental, Edwin Aldunate, quien también negoció con el Fondo, dijo que los funcionarios de esta organización fueron implacables: “El FMI insistió en el 5,5%. Nosotros les explicamos que el 5,5% no era viable. Les dije eso aquí mismo, en esta oficina que [el recorte en los gastos y el incremento de impuestos] podrían provocar serios conflictos sociales.”⁶⁰

¿Exactamente cuán obligado está Bolivia, o cualquier otro país pobre, a cumplir las sugerencias del FMI?

Los funcionarios del Fondo dicen que no dan órdenes a los países, sólo les dan consejos. Los países son soberanos, dice el Fondo, y es el propio país quien toma la decisión de aceptar o rechazar sus recomendaciones.

Pero en realidad, los funcionarios bolivianos tenían pocas opciones más que seguir las recomendaciones de la institución. De no hacerlo, advirtieron, podría costarle muy caro al arriesgar la tan requerida ayuda internacional que necesita el gobierno para sobrevivir.

George Gray Molina, un alto funcionario de UDAPE (la oficina de investigación de asuntos económicos del gobierno boliviano) estuvo involucrado en las negociaciones con el Fondo tanto en Washington como en Bolivia. En las mismas reuniones donde funcionarios del FMI expresaron estas preocupaciones, también dejaron en claro que si el gobierno no alcanzaba la meta de reducción del déficit del 5,5%, el FMI negaría ayuda de largo plazo. Sin tal acuerdo, dice Gray, el gobierno se arriesgaba no sólo a perder la asistencia del Fondo sino también la ayuda de donantes clave como Alemania, Dinamarca y Suecia.⁶¹

Molina explica la posición del FMI de esta manera:

[Los funcionarios del FMI] te dicen [que] nosotros nos ocupamos de la agenda; estrictamente hablando, eso es cierto. Pero si no cerráramos [el acuerdo], no podemos pagar los sueldos de educación. ¿Nos van a ayudar? No, no nos van a dar ningún puente más [para la ayuda económica]. Cada mes estábamos frente a la pared.

Los vaivenes políticos durante la creación de un paquete impositivo

Una vez colocados contra la pared y buscando un modo para reducir el déficit de Bolivia en un cuarto de mil millones de dólares, UDAPE, las reparticiones de impuestos del Tesoro y otras comenzaron a esbozar algunas sugerencias para que las considere el gobierno.

La primera alternativa que desarrollaron se basaba en aplicar nuevos impuestos a la industria hidrocarburífera boliviana. Esto tenía sentido desde varios puntos de vista. Primero, fue la privatización del petróleo y del gas en los años 90 que dio el empuje final a la creación del déficit; segundo, aplicando estos nuevos impuestos a la exportación de gas y petróleo, el costo sería cargado a las compañías extranjeras en lugar de a los consumidores bolivianos. Si se hubiera aplicado la propuesta, se habría generado alrededor de 160 millones de dólares por año, más de la mitad de lo que se necesitaba para alcanzar las demandas del FMI.⁶²

La segunda alternativa que UDAPE y el Viceministerio de Políticas Impositivas propuso al presidente, fue un nuevo impuesto escalonado aplicado al ingreso económico de las personas, que sería cubierto por el 4% más adinerado de la población.⁶³ Los impuestos serían aplicados sólo a quienes tuvieran un ingreso igual o mayor a diez salarios mínimos nacionales, con tasas graduales de acuerdo a los ingresos. Debido a que estas medidas sólo alcanzarían a una minoría, no habría una gran generación de recursos para el Estado. Se calculó que se generarían alrededor de 20 millones de dólares por año.

Quienes estaban de acuerdo con esta política, incluyendo UDAPE, el vicepresidente Mesa y otros, veían en ella una forma de comenzar a democratizar el sistema de impuestos; colocando la carga fiscal sobre quienes tenían más posibilidades de pagar. Pensaban que con el tiempo, ello también ayudaría a reacomodar el valor regresivo de los impuestos del país (similar al impuesto sobre las ventas).

Los planes para establecer nuevos impuestos para el gas y el petróleo fueron rápidamente desechados. El ministro de Hidrocarburos viajó a México para encontrarse con un consorcio internacional, *Pacific LNG*, con el propósito de discutir un plan de exportación de gas a California, EE.UU. Cuando regresó del viaje y escuchó acerca de la proyectada propuesta para fijar nuevos impuestos a la industria de los hidrocarburos, Molina cuenta que el ministro le dijo al presidente y a sus asesores presupuestarios: “esto es imposible, es una locura”, y

advirtió que esos impuestos podrían hacer inviable el acuerdo que se negociaba para la exportación del gas.

El ex vicepresidente de ese entonces, Carlos Mesa explicó así el argumento de las compañías extranjeras y de sus aliados bolivianos sobre los impuestos:

La gran coartada, el gran argumento de las empresas transnacionales es la seguridad jurídica. El momento en que tú modificas tu régimen de impuestos estás cambiando las reglas del juego que establecieron la posibilidad de que esas empresas vinieran a invertir en Bolivia. Con otro conjunto de reglas menos predecibles, ellos dicen, no nos hubiéramos arriesgado en venir aquí. Esto demostraría de que éste no es un país [en el que se respetan los acuerdos] y enviaría la señal: “no vengas a invertir en Bolivia porque te dicen una cosa y después hacen otra”.⁶⁴

Desde el punto de vista de Mesa y de otros, la demanda por impuestos más altos a las compañías extranjeras era legítima. En Estados Unidos y en cualquier lugar, aumentar los impuestos de las corporaciones es siempre un tema considerado legítimo para su discusión cuando se trata de estructurar presupuestos y políticas impositivas. Sin embargo, el entonces presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, respaldando a su ministro, desechó rápidamente el impuesto para la industria de los hidrocarburos.

Cabe hacer notar que si el objetivo de Sánchez de Lozada era el de proyectar una imagen de estabilidad a los inversionistas extranjeros, es poco probable que lo lograra montando un espectáculo internacional con el ejército y la policía nacional disparándose mutuamente frente al Palacio de Gobierno.

Buscando una forma alternativa para sortear el déficit, Sánchez de Lozada puso en la mira la propuesta de gravar progresivamente los ingresos de las personas, presentada por los analistas de UDAPE. Molina dijo que cuando la propuesta fue entregada al presidente, éste quiso ver cuánto de ingresos podría obtener el gobierno bajo una variedad de alternativas impositivas, abarcando inclusive a la gente que ganaba el equivalente a dos salarios mínimos, es decir, unos 110 dólares al mes.

Cuando fuimos a discutir esto con el presidente, se interesó mucho en ver todo el rango, o sea todas las posibilidades. El plan impositivo que nosotros proponíamos desde UDAPE recaudaría muy poco dinero, menos de 20 millones de dólares. En cambio la simulación [extender el impuesto a la gente que ganaba dos salarios mínimos] iba desde 20 millones hasta 80 millones, \$US 90 millones.

A principios de febrero, Sánchez de Lozada y sus principales asesores políticos y económicos se enfrascaron en un intenso debate sobre si se debía ir adelante con el plan impositivo que abarcaría a más contribuyentes. Quienes se oponían al proyecto argumentaban que crearía una nueva carga para la gente de bajos recursos y que podría encontrar una feroz resistencia pública; una posición

corroborada por las encuestas que había realizado el propio gobierno. UDAPE preparó una serie de cuadros para el presidente, que mostraban quiénes serían afectados por los nuevos impuestos: maestros, policías, enfermeras y otros trabajadores con bajos ingresos.

Luego, recordó Molina, el presidente preguntó sobre el impacto de estos impuestos en los diferentes grupos, incluyendo a maestros y enfermeras. De acuerdo a los análisis de UDAPE, la gente con más bajos ingresos tendría que pagar un incremento de Bs.14 por mes (alrededor de dos dólares). Para la gente como el presidente y sus asesores, esta suma era como cambio de bolsillo. Para muchos otros bolivianos era suficiente para comprar alimentos para tres días.

Sánchez de Lozada tomó la decisión de llevar adelante el ‘impuestazo’ (como lo bautizó la prensa) y la noche del domingo 9 de febrero lo anunció en un discurso a la nación. Para el pueblo boliviano todo parecía indicar que el gobierno estaba tratando de equilibrar el presupuesto sobre las espaldas de los trabajadores más pobres. “El 90% de la población estaba exenta del impuesto”, añadió Molina “pero fue un terrible error, un error en lo político y en lo económico.”

Fue tan terrible el error que pronto lo veríamos estallar en una convulsión de sangre y violencia.

IV. Dos días sangrientos de febrero

En el centro del gobierno de la nación, en las gradas del Palacio de Gobierno y del Congreso Nacional en La Paz, las dos principales fuerzas armadas, el ejército y el grupo especial de seguridad de la policía, se vieron envueltas en un fuego abierto. ¿Cómo desencadenó el anuncio presidencial esta violencia que causaría la muerte a 34 personas?

Oposición desde casi todos los frentes; incluso desde la policía nacional

La reacción popular a la propuesta del ‘impuestazo’ fue tan rápida como negativa. La mañana siguiente al anuncio, el principal líder de la oposición, Evo Morales—quien siete meses antes terminó en las elecciones generales a sólo dos puntos porcentuales por debajo de Sánchez de Lozada, y que liderizaba la segunda bancada más grande en el Congreso—hizo un llamado a la población a rechazar la propuesta del nuevo impuesto. Convocó también a la movilización nacional, incluyendo marchas y otros actos de desobediencia civil.⁶⁵ En el transcurso de las 24 horas siguientes a ese llamado a la resistencia, se unieron la Central Obrera Bolivia (la principal organización laboral), movimientos sociales en Cochabamba, y una unidad clave de la policía nacional, el Grupo Especial de Seguridad (GES).⁶⁶

La policía estaba ya envuelta en una batalla en contra del gobierno por el retraso en el pago de sus salarios de enero y el rechazo del presidente a una

demanda de aumento salarial de 40%.⁶⁷ “el impuestazo, esa ley del impuestazo, ha significado la gota que ha rebasado el vaso,” dijo David Vargas, el Mayor del GES que encabezó las protestas de la policía.⁶⁸

Según el Mayor Vargas, un policía (tomando en cuenta la cantidad de sobre horas sin remuneración que trabaja) termina ganando un equivalente a 15 centavos de dólar por hora. A pesar de que muchos policías de bajo rango ganaban menos del doble del salario mínimo nacional y no hubieran sido afectados inmediatamente por el impuesto, él aseguró que la policía pensaba que el impuesto los afectaría algún día y que tendría un efecto inmediato en miembros de sus familias. “Los policías tienen hermanos y hermanas que son profesores, hermanos y hermanas que son fabriles, hermanos y hermanas de diferentes áreas del sector social, y obviamente ellos también serían afectados.”

Tan pronto como el presidente hizo el anuncio, se convirtió en el tema de discusión en los cuarteles policiales a lo largo de la sede de gobierno. Vargas recordó que la reacción entre los oficiales de la tropa era característica de la cultura indígena aymara, a la cual muchos pertenecían. Entre los aymara la toma de decisiones de la comunidad es respetada profundamente, cerrada a los de afuera y es la última palabra.

“Primero se quedan callados, esperando que se retiren los que no forman parte de su clase social. Me dijeron: ‘gracias mi Mayor. Lo vamos a llamar si lo necesitamos.’ Me fui y empezaron a reunirse.” Luego de estas discusiones, los policías anunciaron que se opondrían al nuevo impuesto e inmediatamente demandaron una reunión con el ministro de Gobierno, Alberto Gasser.

Ese martes 11 de febrero, Gasser declaró que no hablaría bajo presión de la policía y que la propuesta por los nuevos impuestos era “innegociable”.⁶⁹ Pero a las seis de la mañana del miércoles 12 de febrero, Gasser entró al cuartel del GES para comenzar las negociaciones.

El cuartel del GES, un edificio pintado de verde pálido, se sitúa cruzando la plaza Murillo a pocos metros del Palacio de Gobierno y el Congreso Nacional. Cuando el ministro de Gobierno se hizo presente, se encontró con una fuerza policial completamente armada de pistolas, gases lacrimógenos, rifles y una variedad de armas de asalto. El entonces Mayor Vargas y otros líderes de la policía, presentaron 30 demandas específicas que comenzaban con el rechazo al propuesto impuesto e incluían un aumento salarial y otros asuntos.⁷⁰

El vicepresidente Mesa y otros criticaron a la policía de descarado oportunismo. “La policía buscó el momento de mayor debilidad del gobierno para generar una medida de presión que obligaba al gobierno a darles una respuesta positiva,” dijo.⁷¹ De allí en adelante, el gobierno se refirió a estas acciones como una “insurrección policiaca.”

Vargas añadió: “Los otros puntos nacieron cuando dijimos ‘vamos a hablar con el ministro’. Como vamos a ir hablar con el ministro, aprovechemos. No vayamos solamente por el impuestazo, aprovechemos [la oportunidad] y llevemos

otras cosas más que nos están afectando.” Vargas insistió de que, sin embargo, nunca se puso en tela de juicio que la demanda principal de la policía era eliminar el propuesto nuevo impuesto, que la policía sugirió se modifique para que se aplique a aquellos que ganaban igual o más de Bs. 5 000, el equivalente a 660 dólares por mes. Si el gobierno hubiera aceptado esta demanda, asegura, la policía hubiera suspendido sus protestas.

Vargas agregó que la respuesta del ministro a cada una de las demandas y principalmente a la eliminación del impuesto, fue repetir una y otra vez “no se puede.” Vargas menciona que el ministro les dijo que la medida impositiva “no podía ser eliminada. El presidente no puede hacer eso. Tenemos un compromiso con el Fondo Monetario Internacional. No podemos dar marcha atrás porque se pensaría que el gobierno no es serio.”

Miércoles en la sede de gobierno: una espiral sangrienta no intencionada

Con el fracaso de las primeras negociaciones, los acontecimientos en la plaza Murillo derivaron en una espiral fuera de control, de una manera que ni el gobierno, arrinconado en una esquina de la plaza ni la policía, en la otra, nunca hubieran imaginado.⁷²

En el transcurso de la mañana, los policías alrededor de la ciudad abandonaron sus puestos y se dirigieron al cuartel cercano a la plaza Murillo. Al menos doscientos de ellos llenaron el edificio ubicado a sólo pasos de la oficina presidencial y detrás de la Cancillería. A las 10 am, cerca de 100 policías, algunos con uniformes y otros vestidos de civil, comenzaron a marchar por la plaza coreando sus demandas hacia las ventanas del Palacio de Gobierno donde Sánchez de Lozada y su gabinete se reunían para discutir una salida a la crisis que se complicaba minuto a minuto. En este punto las protestas, aunque airadas, aún se mantenían pacíficas.

Al medio día, estudiantes de un colegio cercano, el Colegio Ayacucho, entraron a la plaza para sumarse a las protestas. Se acercaron al Palacio y comenzaron a tirar piedras a las ventanas, generando los aplausos de la policía. Los guardias militares que se encontraban al interior, inmediatamente salieron a los balcones y comenzaron a lanzar gases lacrimógenos a los estudiantes y en dirección al cuartel de policía. Los estudiantes corrieron y pidieron a la policía que los protegiera. “Los disparos [de gases lacrimógenos] alcanzaron la sede policial y eso fue tomado como un acto de provocación y entonces [la policía] disparó los gases de vuelta”, contó Vargas.

Minutos más tarde, cientos de tropas militares armadas con rifles M-16, lanza granadas y otras sofisticadas armas, comenzaron a ocupar la parte de la plaza Murillo más cercana al Palacio de Gobierno. La policía y otros civiles que llenaron la otra mitad de la plaza, cercana a la sede de los policías, comenzaron

a insultar a los soldados. En el caos, un soldado situado en frente del Congreso Nacional disparó un balín a la multitud, hiriendo a un policía en el rostro.

Al inicio de la tarde, cada bando ocupaba una mitad de la plaza. Los familiares de los policías, los jubilados del sector y otros grupos sociales comenzaron a llegar desde distintos lugares de La Paz. Poco después de la una de la tarde, miembros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, la principal organización de su tipo en Bolivia, empezó a mediar entre la policía del GES y el gobierno en una reunión celebrada en las oficinas del Ministerio de Defensa. Líderes políticos, incluyendo a Evo Morales, aparecieron en televisión para reiterar sus demandas de eliminar el impuesto propuesto. Otros, como Manfred Reyes Villa, el dirigente del tercer partido político con mayor representación en el Congreso, pidieron la renuncia del presidente.

A las dos de la tarde, mientras las negociaciones continuaban, la tensa situación en la plaza finalmente alcanzó un punto álgido. Los policías y soldados comenzaron de nuevo a lanzarse gases lacrimógenos unos a otros y, después del gas, balas. Un informe posterior de la Organización de Estados Americanos, estableció que fue la policía quien comenzó a disparar primero. La policía dice que fue el ejército. Al final de la tarde habían 18 personas muertas por el tiroteo entre policías, soldados y civiles.⁷³ Entre ellos, un joven de 16 años de edad asesinado por un francotirador del ejército.

Después de las cuatro de la tarde, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada hizo una aparición televisiva y radiofónica para anunciar que había dado marcha atrás en sus planes de aplicar el impuesto. Para entonces, ya era demasiado tarde. La combinación de la cólera popular por los asesinatos en la plaza y la ausencia de la policía en las calles de la ciudad, desataron una ola de disturbios y vandalismo.

Sánchez de Lozada y el vicepresidente Mesa abandonaron sus oficinas en busca de lugares más seguros. Algunos de los manifestantes entraron a las oficinas de la Vicepresidencia, arrojando por la ventana computadoras y otros equipos. Las oficinas de los dos principales partidos políticos en el gobierno, fueron saqueadas y quemadas. Otros incidentes similares ocurrieron en el Ministerio de Trabajo, incluyendo también a uno de los restaurantes de *Burger King*, cuyo dueño en Bolivia era uno de los aliados políticos clave del presidente.

Jueves: una ciudad militarizada y muerte en el tejado

En la mañana del jueves 13 de febrero, los habitantes de La Paz despertaron con las calles llenas de soldados y un remolino de protestas públicas que exigían la renuncia del presidente. La plaza Murillo estaba ahora resguardada con tanques del ejército en las cuatro esquinas. Las protestas que pedían la salida de Sánchez de Lozada estaban también en curso en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro.⁷⁴

Muchas de las protestas tuvieron como objetivo atacar los símbolos del poder internacional en Bolivia. En la parte superior de la ciudad de La Paz, en la ciudad de El Alto, una multitudinaria marcha trató de ocupar la planta embotelladora de Coca Cola. Se llevaron a la fábrica soldados en helicóptero, quienes abrieron fuego a la multitud matando a cuatro personas. Otros diez morirían antes de que el día finalizara durante la represión de las protestas con gases lacrimógenos y balas.

“El jueves trece no murió un sólo policía, no murió un sólo militar. Todas las víctimas fueron civiles, producto de la represión gubernamental,” dijo Sacha Llorenti, en ese entonces presidente de la Asamblea de Derechos Humanos, quien jugó un importante papel mediador entre el gobierno y los manifestantes.⁷⁵

En La Paz otra multitud de manifestantes se reunía en las puertas de la iglesia católica del siglo XVI, ubicada en la plaza San Francisco. Durante la mañana, la policía militar intentó dispersarla con gases lacrimógenos y balas de goma.

Justo en frente de la iglesia se sitúa un edificio de tres pisos cubierto de estuco verde desmoronándose. El piso inferior aloja una tienda de revelado fotográfico, el segundo piso varias oficinas y el tercero, un gimnasio que también es utilizado como un estudio de danza. Poco después de medio día, un albañil de 25 años, Ronald Collanqui, subió al techo que estaba reparando para guardar sus herramientas. Recibió un disparo ejecutado por francotiradores del ejército desde una ventana ubicada al frente, cruzando la calle. Mientras Collanqui se moría en el techo, el portero del edificio llamó a una ambulancia.

Ana Colque era una estudiante de enfermería de 24 años de edad. Madre soltera de un niño de 22 meses llamado Luis, vivía con sus padres. Según la madre, Ana había estado ayudando a los heridos todo el día anterior. La mañana del jueves le dijo a su familia que saldría otra vez.

Su madre recuerda que hacía poco, Ana había estado involucrada en un proyecto médico especial y por lo tanto tenía a mano un lote de medicamentos difíciles de conseguir. “Tenía harto medicamento; tenía las pinzas, mariposas que es para poner sueros, inyecciones, calmantes, tenía hartos en la casa; sobra había tenido, todo eso se ha cargado porque días antes dice que los enfermos no tenían con qué darles calmantes, sufrían, lloraban.” Su familia le pidió que no saliera, pero Ana se fue temprano pidiéndole a su madre que cuidara de su hijo.⁷⁶

A la 1:20 de ese jueves por la tarde, Ana llegó al edificio donde el cuerpo del albañil alcanzado por el disparo yacía tendido. Arribó en una ambulancia marcada con una cruz roja y usando el uniforme blanco de enfermera. Subió al techo acompañada por la doctora Carla Espinosa. Mientras Ana se acercaba hacia el cuerpo del albañil, un francotirador del ejército disparó desde una pequeña ventana de un edificio a poca distancia. El tiro perforó su pecho. Diez minutos más tarde se iba en la misma ambulancia en la que llegó. Murió poco después de ingresar al hospital.

Los soldados responsables de ambas muertes dijeron más tarde que habían pensado que el albañil y la enfermera eran francotiradores y que habían disparado en defensa propia.⁷⁷

Funcionarios del FMI de Washington estaban en La Paz durante esos días de violencia generados por sus demandas de reducción del déficit. Según varias personas que se reunieron con la misión del FMI, mientras la violencia tomaba las calles los funcionarios abandonaron el hotel Plaza, de cinco estrellas, se dirigieron al aeropuerto de El Alto y abandonaron Bolivia. En su ruta hacia el aeropuerto debieron haber pasado por el edificio donde Ana Colque fue asesinada.⁷⁸ Al día siguiente, el Fondo emitió un comunicado público diciendo que “lamentaban los trágicos eventos en Bolivia”, y expresaban su interés por continuar negociando con el gobierno boliviano.⁷⁹

V. Las consecuencias

El viernes por la mañana tanto las protestas como la violencia habían acabado. El presidente Sánchez de Lozada publicó una solicitada de una página completa en los periódicos de mayor circulación del país declarando: “Felizmente puedo decirles que la paz y la tranquilidad han retornado.”⁸⁰

Con su propuesta del paquete impositivo rechazada tan rotundamente, el gobierno dio marcha atrás tanto en esta política como también en la meta de alcanzar una reducción considerable del déficit. Optó al contrario por una serie de gestos simbólicos para calmar la ira de la gente. Sánchez de Lozada anunció que comenzaría a donar su salario de \$US 3 900 mensuales a un orfanato. Eliminó varios Ministerios y Viceministerios, pregonando los recortes como parte de un nuevo compromiso por la eficiencia pública.⁸¹ Despidió a los miembros de su gabinete que estaban más vinculados con la represión gubernamental. Finalmente, el presidente declaró a la nación: “Nuestro presupuesto no será un presupuesto del Fondo Monetario Internacional.”⁸²

El déficit presupuestario boliviano

El déficit público de Bolivia en 2003 terminó siendo del 7,9% del PIB. Esto fue un punto porcentual menor que el del pasado año, pero un total de 2,5% y 195 millones de dólares más alto del que el FMI intentaba alcanzar. Fue casi 1,5% más alto que el nivel que los analistas gubernamentales pensaron podían haber alcanzado si hubieran aplicado los planes originales de crear nuevos impuestos para la industria del gas y el petróleo, y un impuesto que alcanzaba al 4% de la población con mayores ingresos.

Dos años después del Febrero Negro, en febrero de 2005, el sucesor de Sánchez de Lozada, Carlos Mesa, anunció que el país había alcanzado un déficit,

coincidentalmente, exactamente en línea con la meta original del FMI, 5,5%.⁸³ El gobierno aseguró que fue posible alcanzar esa meta gracias al nuevo impuesto a las transferencias y a las remesas en dólares y a un modesto crecimiento económico.

En las postrimerías del febrero sangriento boliviano, el FMI se movió rápidamente para deslindar cualquier responsabilidad por la violencia. “La misión del Fondo apoyó decididamente los esfuerzos gubernamentales para reducir el déficit fiscal de niveles insostenibles. Sin embargo, las medidas fiscales que estaban incluidas en el paquete de políticas del gobierno, fue determinado por el gobierno mismo,” dijo el FMI en un comunicado escrito.⁸⁴ A menos de dos semanas del tiroteo, el Fondo anunció públicamente que había alcanzado un acuerdo para aplicar un programa transitorio de apoyo al gobierno, que aparentemente abandonaba todo intento por alcanzar los objetivos de reducción del déficit fiscal que el FMI había exigido alcanzar previamente.⁸⁵

En febrero de 2005, casi dos años después de las muertes de Febrero Negro, el director-gerente del Fondo, Rodrigo de Rato, realizó una visita a Bolivia y se entrevistó con varios de sus principales líderes políticos. No mencionó los eventos ocurridos dos años antes ni tampoco se disculpó. Sin embargo, repitió las demandas del FMI de que Bolivia continuara reduciendo su déficit aún más. Así como hace dos años, la institución financiera dijo una vez más que ese asunto no era una exigencia del FMI, sino un acuerdo entre el Fondo y el gobierno.

Hemos acordado que, a la luz de la aún pesada carga de la deuda de Bolivia, el programa fiscal del gobierno debe buscar reducir el déficit fiscal y la deuda para de esta manera hacer duradera la estabilidad económica y financiera, y mantener la actual recuperación económica.⁸⁶

En diciembre de 2005, el FMI anunció la anulación de la deuda que le debían 19 países de bajos ingresos, incluyendo la deuda boliviana por \$US 251 millones.⁸⁷ En marzo de 2006, dos meses después de asumir el mando, el presidente Evo Morales dejó que el acuerdo vigente con el FMI expirara y se negó a entablar negociaciones para establecer uno nuevo. Bolivia se unió así a una creciente tendencia en países latinoamericanos, junto a sus vecinos de Argentina y Brasil, de terminar las relaciones crediticias con el Fondo y sus condiciones económicas.

En mayo de 2006, el presidente Morales emitió un decreto presidencial que iniciaba un proceso de recuperación del control estatal de las reservas de gas y petróleo y aplicó fuertes alzas impositivas a las compañías petroleras extranjeras. Como resultado de tales medidas, se esperaba que los ingresos estatales para 2007, provenientes de los hidrocarburos, superarían los 1 000 millones de dólares.⁸⁸ Bolivia pasó de tener un déficit a un superávit fiscal al aplicar dichas reformas, precisamente incrementando los impuestos a las petroleras, posibilidad que el FMI había advertido que no se realice.

El gobierno de Sánchez de Lozada y la búsqueda de justicia

A pesar del ofrecimiento de Sánchez de Lozada de entregar su salario a un orfanato y del inmediato apoyo recibido de parte del gobierno estadounidense, las muertes de febrero dejaron una carga de rabia y desconfianza de la cual el presidente nunca pudo recuperarse.

El siguiente octubre, Bolivia se vio envuelta nuevamente en una serie de protestas, esta vez, por el plan de Sánchez de Lozada para exportar parte de las vastas reservas de gas bolivianas a México y California a través de Chile. Este mismo negocio fue el que llevó a Sánchez de Lozada a retirar de la mesa el plan para aplicar impuestos a la industria de los hidrocarburos, ese febrero pasado.

La extendida desconfianza pública hizo que muchos creyeran que Sánchez de Lozada estaba preparando un negocio que enriquecería aun más a las transnacionales extranjeras y a unos cuantos políticos con suerte, pero que no produciría ningún beneficio real para el ciudadano común. Ayudó también a esta percepción el profundo antagonismo histórico que sienten los bolivianos hacia Chile, su vecino cordillerano del sur, por la pérdida de acceso al mar producto de una invasión chilena en 1879.

Una vez más, el presidente enfrentó las protestas populares con las armas, dejando por lo menos 53 personas muertas y cientos de heridas. Tras la matanza, tomó cuerpo el llamado desde las calles pidiendo la renuncia de Sánchez de Lozada. Muchos de los más respetados intelectuales y líderes de derechos humanos se unieron en una huelga de hambre nacional para exigir la renuncia del primer mandatario. Incluso su propio vicepresidente, Carlos Mesa, rompió con el presidente debido a la violencia con la que el régimen enfrentaba las protestas. El 17 de octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada renunció a la presidencia y se embarcó en un avión rumbo a Estados Unidos. En febrero de 2005, el gobierno boliviano anunció sus intenciones de iniciar un juicio de responsabilidades al ex presidente por las muertes de febrero y octubre de 2003. Sánchez de Lozada vive ahora en los suburbios de Maryland, EE.UU., cerca de la capital estadounidense, donde se ha impuesto un exilio y ha rechazado las demandas del gobierno boliviano de que regrese a Bolivia para ser juzgado.

El Febrero Negro boliviano dejó 34 personas muertas y otras 182 seriamente heridas entre civiles, militares y policías, cuyas edades van desde los 11 hasta los 68 años.⁸⁹ Algunos habían participando directamente en el conflicto, otros, como Ana Colque, fueron víctimas fatales de las circunstancias. ¿Qué se ha hecho para aplicar la justicia por los heridos y muertos?

Inmediatamente después del Febrero Negro, el presidente Sánchez de Lozada hizo una petición formal a la Organización de Estados Americanos (OEA) para llevar a cabo una investigación de los sangrientos acontecimientos. La OEA aceptó el trabajo y en mayo de 2003 dio a conocer sus resultados. El informe culpa de la violencia de febrero a las “acciones inconstitucionales” y

de “insubordinación” de la policía. Justifica las acciones del ejército llamándolas “proporcionales” y “contenidas” y después pide apoyo para el presidente Sánchez de Lozada.⁹⁰

Amnistía Internacional, que realizó su propia investigación de los mismos eventos junto con otros grupos de derechos humanos, cuestiona los resultados del informe de la OEA que absuelve al gobierno y al ejército de cualquier responsabilidad por sus actos:

Amnistía Internacional considera que a la luz de los testimonios e informes recogidos por la delegación de la organización, información de prensa, documentación judicial y el alto número de víctimas, el comportamiento de las fuerzas militares que actuaron los días 12 y 13 de febrero de 2003, parecería no haber sido “contenida” ni “proporcional”.⁹¹

Los esfuerzos de la justicia por llevar a juicio a los responsables han encontrado la resistencia del ejército, dicen los fiscales.⁹² En mayo de 2003, la madre de Ana Colque, con el apoyo de grupos de derechos humanos, inició una demanda criminal contra cuatro miembros del ejército identificados como los asesinos de su hija. El caso ha sido archivado en una maraña de disputas sobre si los militares pueden enfrentar cargos en tribunales civiles. El ejército insiste en que sus miembros deben ser juzgados en tribunales militares, donde difícilmente se penalizan crímenes demostrados con suficiente evidencia. Dos años después de los trágicos acontecimientos de febrero, ninguna persona ha sido convicta o responsabilizada por las muertes.

La madre de Ana Colque vive cada día con la memoria de su hija asesinada y con la rabia por la impunidad que gozan los asesinos de su hija:

Yo hubiera querido que ellos se fijen a quién están disparando porque no hay que matar a una enfermera, a la ambulancia se respeta hasta en la guerra, dicen, ellos han debido estudiar, deben saber ¿no? Eso sabiendo, ellos han disparado a mi hija, eso es lo que a mí me duele, porque a mí me dicen ni en la guerra se les mata, al médico, a la ambulancia no se le hace porque está auxiliando, entonces de esa manera a mí me da rabia que a sangre fría y todavía una chica joven que tenía por delante me lo han hecho eso.⁹³

El padre de Ana Colque es un soldado, un músico de la banda del ejército. La madre de Ana dice que él nunca ha mencionado el caso en los círculos militares: “No ha dicho nada, ni siquiera que era su hija. El dice; ‘¿Qué se puede hacer? ¿Yo qué voy a ir a hacerles? ¿Los voy a matar? Yo soy de menos rango, ellos son de mayor, a mí al rato me van a botar, me van a hacer; ellos son capitanes, son generales, a ellos nadie les puede hacer nada.’” La familia piensa que podría perder el salario del ejército y así no poder sacar adelante a sus otros hijos, incluyendo al hijo de Ana que ahora tiene cuatro años.

VI. Conclusiones

Febrero de 2003 fue una tragedia nacional para Bolivia. Treinta y cuatro familias enterraron a su gente querida. Más de cien personas tienen heridas incurables en sus cuerpos. El país observó con horror cómo sus dos principales fuerzas armadas –la policía y el ejército– pelearon entre sí una guerra en el corazón mismo de la sede de gobierno. Por un par de días, la democracia boliviana pareció estar al borde de una total destrucción.

Una tragedia como esta exige que quienes participaron de ella aprendan las lecciones. En ausencia de tal reflexión, más tragedias como ésta pueden ocurrir en cualquier momento. Las lecciones de Febrero Negro son, como el ex presidente Mesa dijo, “lecciones aprendidas a sangre y fuego”.

Sacha Llorenti, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, jugó un papel importante en la mediación del conflicto, y dice del Febrero Negro: “Es el momento en el que se desnuda la crisis estatal hasta el punto de mostrar los huesos de Bolivia.” Fue un momento en el que las políticas del Fondo Monetario Internacional y el sistema económico global se desnudaron hasta los huesos.

El FMI y el Banco Mundial operan en un mundo de teorías. Las ideas de cómo el mundo funciona son escritas pulcramente en páginas blancas. Las fórmulas y los hallazgos económicos son compartidos con otros economistas en salas de reuniones bien organizadas. Ninguno de los funcionarios que trabajan para esas instituciones es pobre. Ninguno de ellos debe vivir con los resultados concretos de lo que proponen. El personal y quienes manejan el Fondo creen no sólo que están en lo cierto sobre lo que es bueno para los países pobres, sino incluso creen saber más que la gente que vive en ellos.

Como lo dijo el ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa:

Está claro que hay una línea ortodoxa, estrictamente macroeconómica, sin una visión de lo que representa su aplicación en el contexto de cada país. Creo que los ejemplos de América Latina son extremadamente ilustrativos, no voy a abundar sobre el tema de Argentina [donde las exigencias del FMI ayudaron a meter a la nación en una espiral de caos político en 2001], que es un ejemplo dramático de cómo una política ciega en una dirección da resultados catastróficos.⁹⁴

Entonces, ¿qué pasa cuando el FMI y el Banco Mundial se equivocan? ¿Qué sucede si la teoría que luce tan bien en el papel no lo es tanto una vez que es aplicada en el mundo real? ¿Entonces qué?

John Maynard Keynes, el padre de ambas instituciones, dijo en una oportunidad: “Cuando los hechos cambian, yo cambio mi forma de pensar. ¿Qué hace usted señor?”⁹⁵ Si tuviéramos que preguntar lo mismo a los funcionarios del Banco Mundial, sus respuestas serían algo así como ‘defendemos la teoría y culpamos a la aplicación’.

Una y otra vez, cuando se enfrentan a las realidades sobre el terreno que quedan cortas con sus teorías y pronósticos, los funcionarios del Banco Mundial y el FMI culpan, no a la teoría, sino a la falta de una buena aplicación de las recetas por los gobiernos de los países pobres. Ellos aseguran que es el gobierno quien toma las verdaderas decisiones. Ellos pueden elevar los impuestos del gas, imponer nuevos impuestos o reducir el déficit fiscal a través del recorte de gastos. El Fondo asegura que las malas gestiones gubernamentales tienen a disposición una serie de opciones prácticas.

Pero en el mundo real, estas opciones terminan siendo mucho más difíciles de lo que el FMI está dispuesto o quiere admitir. Un impuesto a los ingresos de los más pudientes sólo cumple con una parte de las demandas del FMI. Otra demanda del Fondo, fomentar la exportación del gas se enfrenta a una barrera cuando se habla de la aplicación de impuestos a este sector. En gran medida, el recorte del gasto público no puede ser realizado sin afectar el acceso de los más pobres a los servicios básicos o sin provocar grandes rebeliones.

Este enfoque compartido del Banco Mundial y el FMI, que dice: “nosotros sólo ubicamos los parámetros generales, el gobierno es quien decide”, es muy conveniente para los organismos financieros internacionales. Les permite deslindar responsabilidades cuando las políticas aplicadas tienen resultados negativos y les libra de responsabilidad cuando la gente sufre y se derrama sangre.

Es una posición que trae a la mente la letra de una canción de Tom Lehrer, en la que habla del inventor de la bomba nuclear, Dr. Wernher von Braun: “Una vez que los cohetes están en el aire ¿quién se preocupa dónde van a caer? Esa no es mi responsabilidad”.

Todas las personas, y por lo tanto todas las instituciones manejadas por personas son susceptibles de ser convencidas de que están en lo correcto cuando la realidad demuestra justamente lo contrario. La gran sabiduría de la democracia es que la autoridad debe ser responsable y responsabilizada por sus actos. La gente que debe vivir con una decisión tiene el inalienable derecho de escoger e influenciar a aquellos que ejercitan tal autoridad. Las instituciones económicas como el FMI y el Banco Mundial son por naturaleza antidemocráticas. Quienes las manejan, no se responsabilizan ante la gente a la que afectan con sus políticas, y a sus funcionarios se les permite eludir cualquier sentimiento por el dolor que causan.

¿Cómo puede un profesor o un policía o una enfermera que gana 120 dólares al mes influir en las acciones del FMI que les obliga a pagar un impuesto fuera de su alcance? ¿De qué manera son responsables los economistas en Washington por las presiones que ejercen en los países pobres?

Reducidas a sus más básicos elementos, las políticas del FMI a nivel mundial buscan obligar a los gobiernos a adoptar cierta disciplina para aplicar presión económica. Para asegurar su existencia, los gobiernos e individuos deben vivir con ellas. Pero unos pocos gobiernos en el mundo, incluidos los ricos como Estados Unidos, están exentos de cumplir dichas políticas.

Presionar es algo que hacemos todo el tiempo. Presionamos el brazo de nuestros hijos para llamar su atención al cruzar la calle, presionamos la fruta para ver si está madura. Pero sabemos que no debemos presionar muy fuerte porque podemos dañar la fruta, dañar a nuestros hijos. ¿Cómo sabe el FMI, en ausencia de una responsabilidad real hacia la vida de las personas que afecta, cuándo está presionando demasiado fuerte? El febrero de 2003 en Bolivia, como muchos otros ejemplos antes y después, nos ofrece evidencia clara de que el FMI es in-conmovible a las presiones y al sufrimiento que causa en los países pobres.

El FMI y quienes lo apoyan pueden apuntar a una docena de casos que, si hubieran ocurrido de manera distinta, habrían producido resultados diferentes a las muertes en La Paz, incluyendo el caso de la enfermera asesinada. Si tan solo el gobierno hubiera tomado un enfoque diferente a la cuestión de los impuestos. Si tan solo la policía no hubiera encabezado las protestas contra el plan del gobierno. Si tan solo los militares y la policía hubieran sido más cautos aquella tarde en la plaza principal. Si tan solo el gobierno no hubiera reprimido de esa manera las protestas.

Sin embargo, queda claro que cada uno de estos hechos fue puesto en marcha por la decisión de los funcionarios del FMI de presionar a Bolivia, presionar a través de la coerción económica, presionar para reducir su déficit fiscal más rápidamente de lo que era posible sin provocar un levantamiento popular, lo que sucedió con tan amargos resultados esos dos días de febrero.

A pesar de todas las advertencias, el FMI no escuchó. Continuó presionando hasta que los acontecimientos condujeron a una espiral de sangre, con un previsible y trágico final. Bolivia no es el primer país donde el FMI presionó hasta el punto de la tragedia y lamentablemente tampoco será la última vez que esto ocurra.



Notas

- 1 Joseph E. Stiglitz, *Globalization and its Discontents* (La globalización y sus disgustos) Nueva York: W.W. Norton Company, 2003: p. 11. (Traducción del inglés)
- 2 Fondo Monetario Internacional, "The Origins of the IMF," *What Is the International Monetary Fund?* (2004): <http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what.htm#origins>; Carol Welch, "The IMF & Good Governance," *Foreign Policy in Focus*, Vol. 5, No. 13, Washington DC: Institute for Policy Studies and International Relations Center, octubre, 2001: http://www.fpiif.org/briefs/vol5/v5n13imfgov_body.html; y Stiglitz, *Globalization*, p. 12.

- 3 Stiglitz, *Globalization*, p. 12.
- 4 John Braithwaite and Peter Drahos, "Bretton Woods: Birth and Breakdown," *Global Business Regulation*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000: pp. 97-101. (Traducción del inglés)
- 5 Fondo Monetario Internacional *¿Qué es el Fondo Monetario Internacional?*, 2004: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/spa/whats.pdf>.
- 6 Ibid.
- 7 Ibid.
- 8 Carol Welch, "The IMF & Good Governance."
- 9 Stiglitz, *Globalization*, p. 13.
- 10 Roberto Fernández Terán, *FMI, Banco Mundial y Estado neocolonial: Poder supranacional en Bolivia*, 2da. ed., La Paz: Plural editores, 2004: pp. 28-29.
- 11 Fondo Monetario Internacional, "IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors," 2005: <http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.htm>.
- 12 Fondo Monetario Internacional, "Articles of Agreement of the International Monetary Fund," 2005: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa.pdf>.
- 13 William Finnegan, "The Economics of Empire: Notes on the Washington Consensus," (Las economías del imperio: Notas sobre el Consenso de Washington) *Harpers*, mayo, 2003: p. 45. (Traducción del inglés)
- 14 Fernández Terán, *FMI*, p. 27.
- 15 Fondo Monetario Internacional, "Who Makes Decisions at the IMF," *What Is the International Monetary Fund?* 2004: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what.htm#origins>.
- 16 Fernández Terán, *FMI*, p. 25.
- 17 Fondo Monetario Internacional, "Del crédito del FMI" *¿Qué es el Fondo Monetario Internacional?* 2004: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/spa/whats.pdf>.
- 18 Fernández Terán, *FMI*, p. 25.
- 19 US Congressional Budget Office, "Historical Budget Data," 2005: <http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=1821&sequence=0>.
- 20 US Congressional Budget Office, "CBO's Current Budget Projections," 2005: <http://www.cbo.gov/showdoc.cfm?index=1944&sequence=0>.
- 21 Benedict Clements, Sanjeev Gupta, and Gabriela Inchauste, "Fiscal Policy for Economic Development: An Overview," *Helping Countries Develop: The Role of Fiscal Policy*, Washington DC: Fondo Monetario Internacional, 2004: <http://www.imf.org/external/pubs/nft/2004/hcd/index.htm>. (Traducción del inglés)
- 22 A pesar de la gravedad de los eventos del *Febrero Negro* y a pesar de la evidente relación del FMI con los mismos, los personeros del Fondo en Washington se negaron a hablar oficialmente para este informe. Sin embargo, aceptaron hablar extraoficialmente sobre las políticas generales del Fondo.
- 23 Arthur MacEwan, "Economic Debacle in Argentina: The IMF Strikes Again," *Foreign Policy in Focus*, Washington DC: Institute for Policy Studies and International Relations Center, enero, 2002: <http://www.fpiif.org/pdf/gac/0201argentina.pdf>. (Traducción del inglés)
- 24 Stiglitz, *Globalization*, pp. 12-13.
- 25 Bethan Emmett and Max Lawson, "The IMF and the Millennium Goals, Failing to Deliver for Low-Income Countries," (El FMI y las Metas del Milenio, fallándole a los países de bajos ingresos) Washington DC: Oxfam International, 2003: pp. 1-2.
- 26 Ibid., p. 2.
- 27 Fondo Monetario Internacional, "Bolivia: Transactions with the Fund, Disbursements and Repayments Detail from January 01, 2004 to December 31, 2004," 2005: http://www.imf.org/external/np/tre/tad/extrans2.cfm?memberKey1=70&valueDate=2004&yearType=C&acctType1=GRASDA&extrans_flag=Y.
- 28 Mariano Baptista Gumucio, *Historia universal y de Bolivia*, 10ma. ed. La Paz: n.p., 1994: pp. 192-194.

- 29 Marc Lindberg, "Bolivia: Stabilization and Adjustment 1985-88: Did it Work?" Kennedy School of Government Case Study # C16-90-951.1, Cambridge, MA: Harvard University, 1990, p. 1.
- 30 Fernando Canelas Tardío y Carlos Mesa Gisbert, *Bolivia Milenio*, Cochabamba: Editorial Canelas-Los Tiempos, 1999: p. 107.
- 31 Comentarios sobre Bolivia en la lista negra del FMI y el Banco Mundial, proviene de ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el estudio de caso de Noel Ramírez y Marc Lindberg, "Bolivia: Controlling Hyperinflation 1985-86," Kennedy School of Government Case Study # C16-90-951.0, Cambridge, MA: Harvard University, 1990: p. 4.
- 32 Lindberg, "Bolivia: Stabilization and Adjustment": p. 1.
- 33 Ramírez and Lindberg, "Bolivia: Controlling Hyperinflation": pp. 4-5.
- 34 *Ibid.*, p. 5.
- 35 Gobierno de Bolivia, el FMI y el Banco Mundial, "Bolivia Enhanced Structural Adjustment Facility Policy Framework Paper, 1998-2001," Washington DC: Fondo Monetario Internacional, 25 agosto, 1998: <http://www.imf.org/external/np/pfp/bolivia/index.htm#I> y Carta de Intención entre el Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional, "Bolivia: Memorandum of Economic and Financial Policies," Washington DC: Fondo Monetario Internacional, 25 de mayo, 2001: <http://www.imf.org/external/NP/LOI/2001/bol/01/INDEX.HTM>.
- 36 Fondo Monetario Internacional, "Bolivia Enhanced Structural Adjustment Facility Policy Framework Paper." (Traducción del inglés)
- 37 Memorandum de Entendimiento entre el Gobierno de Bolivia y el Fondo Monetario Internacional, "Memorandum of Economic Policies of the Government of Bolivia," Washington DC: Fondo Monetario Internacional, 21 de marzo, 2003: <http://www.imf.org/External/NP/LOI/2003/bol/01/index.htm>. (Traducción del inglés)
- 38 Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, "Bolivia: Indicadores de pobreza moderada por año, según área geográfica, 1999 - 2002": <http://www.ine.gov.bo/cgibin/piwdie1xx.exe/TIPO>.
- 39 Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrónomo (CEDLA), "Economía boliviana: Evaluación y tendencias," La Paz: CEDLA, 31 enero 2005: http://www.cedla.org/pub/pubfree.php?cod_pubfree=32.
- 40 *Ibid.*
- 41 Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrónomo (CEDLA), "El crecimiento económico sólo favorecerá a pocos exportadores," La Paz: CEDLA, 9 de julio 2004: http://www.cedla.org/noticias/noticia.php?cod_noti=2.
- 42 Precís, "Bolivian Water Management: A Tale of Three Cities," Washington DC: Banco Mundial, primavera 2002: p. 1.
- 43 Vincent Gouarne and John Briscoe, "Don't Shut the Tap on Private-Sector Water," *The Globe and Mail* 18 de mayo, 2000.
- 44 Para un análisis completo de las tarifas de agua ver "Bechtel vs. Bolivia - The Water Hike by Bechtel's Bolivian Company (Aguas del Tunari): The Real Numbers" en el sitio web del Centro para la Democracia: <http://www.democracyctr.org/bechtel/waterbills/waterbills-global.htm>.
- 45 Para una historia completa de la revuelta contra la privatización del agua en Cochabamba, ver "Bolivia's War Over Water": http://www.democracyctr.org/bechtel/the_water_war.htm.
- 46 Fondo Monetario Internacional, "Memorandum of Economic Policies, April 8, 1999": <http://www.imf.org/external/NP/LOI/1999/040899.HTM>.
- 47 Villegas Quiroga, *Privatización*, p. 93; Roberto Fernández Terán, de una entrevista con el autor, La Paz, 23 de marzo, 2005.
- 48 Ministerio de Hidrocarburos, "Estadísticas-Upstream-Producción," 28 julio 2005; "Comportamiento de los impuestos sobre hidrocarburos," datos no publicados de CEDLA, La Paz, 19 de marzo, 2007. (El promedio es calculado por el autor)

- 49 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (UDAPE), “Evaluación de la Economía,” La Paz: UDAPE, 2004: <http://www.udape.gov.bo>.
- 50 Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrónomo (CEDLA), “Análisis comparativo del PGN 2005,” La Paz, Bolivia: CEDLA, 2005: <http://www.cedla.org>.
- 51 Fondo Monetario Internacional, “Memorandum of Economic Policies, April 8, 1999”: <http://www.imf.org/external/NP/LOI/1999/040899.HTM>.
- 52 US Congressional Budget Office, “Historical Budget Data.”
- 53 “President Discusses Homeland Security Department,” Informe de prensa de la Casa Blanca, 7 de junio, 2002: <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/06/20020607-4.html>. (Traducción del inglés)
- 54 “Debt and Deficit Quotes,” <http://zfacts.com/p/467.html>. (Traducción del inglés)
- 55 Fondo Monetario Internacional, “Memorandum of Economic Policies of the Government of Bolivia.”
- 56 “En muchos aspectos el modelo falló,” *El Deber*, 28 de octubre, 2001.
- 57 Los datos son extrapolados de la estimación del Banco Mundial del PIB de Bolivia para 2003 de Bs. 7,8 mil millones y datos de un informe del CEDLA sobre el presupuesto boliviano para 2002 de Bs. 3 055 millones.
- 58 Francisco Baker, vocero del FMI, de una declaración escrita al autor, Washington DC, 22 de febrero, 2003.
- 59 Carlos Mesa, de una entrevista con el autor, La Paz, 26 de mayo, 2003.
- 60 Edwin Aldunate, de una entrevista con el autor, La Paz, 25 de mayo, 2003.
- 61 George Gray Molina, de una entrevista con el autor, La Paz, 12 de febrero, 2005. Gray Molina trabaja ahora para la Organización de las Naciones Unidas en Bolivia.
- 62 Ibid.
- 63 Molina mencionó que la población que hubiera tenido que pagar el impuesto era de 360 000; la población de Bolivia al 2002 estaba estimada en 8,1 millones.
- 64 Carlos Mesa, de una entrevista con el autor, La Paz, 26 de mayo, 2003.
- 65 Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otros, “Para que no se olvide: 12-13 de febrero, 2003,” La Paz: Asamblea Permanente de Derechos Humanos y otros, 2004: p. 21.
- 66 Ibid.
- 67 Juan Forero, “Economic Crisis and Vocal Opposition Test Bolivia’s President,” *New York Times*, 16 de febrero, 2003.
- 68 Esta y todas las citas de David Vargas provienen de una entrevista con el autor, La Paz, 10 de febrero, 2005.
- 69 “Para que no se olvide”: p. 22.
- 70 Ibid.
- 71 Carlos Mesa, ex presidente de Bolivia, de una entrevista con el autor, La Paz, 26 de mayo, 2003.
- 72 Si no se indica de otra manera, la cronología de eventos del 12 de febrero en la plaza Murillo, está basada en la excelente cronología de “Para que no se olvide”: pp. 21-29.
- 73 “Para que no se olvide”, p. 200.
- 74 Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Coordinadora de la Mujer, “El Caso de Ana Colque,” La Paz: Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Coordinadora de la Mujer, 2004: p. 18.
- 75 Sacha Llorenti, de una entrevista con el autor, La Paz, 10 de febrero, 2005.
- 76 Vicenta Quispe de Colque, de una entrevista con el autor, La Paz, 10 de febrero 2005.
- 77 “El Caso de Ana Colque,” pp. 20-21.
- 78 La presencia de la misión del FMI en Bolivia durante el 12 y 13 de febrero descrita por Carlos Mesa, George Gray Molina y Edwin Aldunate, fueron extractadas de entrevistas con el autor en La Paz.
- 79 “Para que no se olvide”: p. 28.

- 80 *Los Tiempos*, 14 de febrero, 2003: A 12.
- 81 “Bolivia’s Crisis-Ridden Leader to Reshuffle Cabinet,” *Reuters News Service*, 13 de febrero, 2003.
- 82 “Goni anuncia recortes, diálogo y un presupuesto que no sea del FMI,” *Opinión*, 17 de febrero, 2003: p. 2.
- 83 Datos del Ministerio de Hacienda: <http://www.hacienda.gov.bo/>.
- 84 Francisco Baker, portavoz del FMI, de una carta escrita al autor, Washington DC, 22 de febrero, 2003.
- 85 Fondo Monetario Internacional, “IMF Staff and Bolivia Agree on Economic Framework for 2003,” Comunicado de prensa, 22 de febrero, 2003.
- 86 Fondo Monetario Internacional, “IMF Managing Director Rodrigo de Rato’s Statement at the Conclusion of his Visit to Bolivia,” Comunicado de prensa, 18 de febrero, 2005.
- 87 Informe entregado a la prensa por el Fondo Monetario Internacional, Washington DC, 21 de diciembre, 2005, “El FMI extenderá el 100% de condonación de las deudas de 19 países bajo la Iniciativa de Condonación Multilateral de la Deuda”: <http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2005/pr05286.htm>.
- 88 Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrónomo (CEDLA), 13 de octubre de 2006, análisis estadístico sin publicar.
- 89 “Para que no se olvide”: pp. 197-203.
- 90 Organización de los Estados Americanos, “Informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre los hechos de febrero de 2003 en Bolivia” mayo, 2003: <http://www.bolpress.com/documentos.php?Cod=2002066843>.
- 91 Amnistía Internacional, “Bolivia: crisis y justicia, Jornadas de violencia en febrero y octubre de 2003,” Londres: Amnistía Internacional, noviembre, 2004: <http://web.amnesty.org/library/index/esLAMR180062004?open&of=esl-BOL>.
- 92 *Ibid.*
- 93 Vicenta Quispe de Colque, de una entrevista con el autor, La Paz, 10 de febrero, 2005.
- 94 Carlos Mesa, de una entrevista con el autor, La Paz, 26 de mayo, 2003.
- 95 Citado en “Quotations by John Maynard Keynes”: <http://wwwgroups.dcs.stand.ac.uk/~history/Quotations/Keynes.html>.